

REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL



JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D C., cuatro (04) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

**Referencia** 110013335 009 **2018** 00559 00  
**Demandante:** Marcelo Orlando González Martínez  
**Demandado:** Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)

---

**CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL**  
(Aprueba conciliación)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley 640 de 2001 y 12 del Decreto 1716 de 2009, el Despacho procede a resolver sobre la aprobación o no del acuerdo conciliatorio extrajudicial celebrado el 22 de agosto de 2018, entre el señor **Marcelo Orlando González Martínez** y **CREMIL** ante la Procuraduría 134 Judicial I Para Asuntos Administrativos.

**1. ANTECEDENTES**

**1.1. Trámite procesal**

**1.1.1.** El 24 de agosto de 2018 el convocante radicó solicitud de aprobación de conciliación extrajudicial correspondiéndole inicialmente a la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fl.53), que en providencia del 09 de noviembre de 2018 declaró la falta de competencia por el factor cuantía y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de la Sección Segunda de Bogotá (fls.56 a 57).

**1.1.2.** Sometido a un nuevo reparto el 14 de diciembre de 2018, le correspondió a este Despacho Judicial (fl.60), por lo que la Secretaría ingresó el expediente el 25 de enero de 2019 (fl.61).

**1.1.3.** De conformidad con lo anterior, corresponde a este Despacho **obedecer y cumplir** lo dispuesto por el Superior, y **avocar** conocimiento del presente asunto.

**1.2. De la solicitud de conciliación**

El señor **Marcelo Orlando González Martínez** a través de apoderado judicial, el 29 de mayo de 2018 presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos, en la que convocó **CREMIL** a efectos de conciliar sobre el reajuste de su asignación de retiro, de conformidad con el IPC certificado por el DANE para los años 1999 en adelante (fls.1 a 7).

### **1.3. La causa fáctica** se sintetiza así:

**1.3.1.** El señor Marcelo Orlando González Martínez prestó sus servicios militares como Sargento Segundo del Ejército Nacional, por lo que mediante la Resolución 4581 del 31 de octubre de 1961 se le reconoció y ordenó pagar la asignación de retiro (fls.14 a 15).

**1.3.2.** El 09 de mayo de 2018 con radicado 20180052468, solicitó a CREMIL el reajuste de la asignación de retiro conforme al IPC (fl.10), y en respuesta 2018-53566 del 24 de mayo de 2018 la entidad convocada denegó su solicitud (fls.11 a 12).

### **1.4. Del acuerdo conciliatorio**

**1.4.1.** La apoderada de la entidad convocada, en el trámite de la conciliación extrajudicial aportó certificación de Comité de Conciliación del 21 de agosto de 2018, en el que señaló (fl.44):

*"<<El día 17 de Agosto de 2018, en reunión ordinaria de Comité de Conciliación se sometió a consideración la Audiencia de conciliación extrajudicial con fundamento en la Ley 1285 de 2009, dentro cde lña solicitud elevada por el señor **GONZÁLEZ MARTÍNEZ MARCELO**. Lo anterior, consta en el acta 059 de 2018.*

**Fecha de Audiencia: 22 de agosto de 2018**

(...)

#### **ANÁLISIS DEL CASO**

*Con ocasión de los recientes pronunciamientos jurisprudenciales proferidos por el consejo de estado y consolidando el precedente judicial sobre reajuste de las asignaciones de retiro y/o sustituciones pensionales con base en el IPC, se tiene que es viable la conciliación frente a las pretensiones del demandante.*

*Es así como en los casos que se exponen, se verificó que se enmarcan dentro del precedente jurisprudencial, y se ajustan a los parámetros establecidos por éste, razón por la cual se pone de presente la viabilidad conciliatoria, teniendo en cuenta los siguientes parámetros Capital 100%, indexación 75%, prescripción cuatrienal, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de radicación de la solicitud de pago no aplica pago de intereses.*

---

DECISIÓN

**CONCILIAR** el presente asunto bajo los siguientes parámetros.

- 1. **Capital:** Se reconoce en el 100%.
  - 2. **Indexación:** Será cancelada en un porcentaje 75%
  - 3. **Pago:** El pago se realizará dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la solicitud de pago.
  - 4. **Intereses:** No habrá lugar al pago de intereses dentro de los seis meses siguientes a la solicitud de pago.
  - 5. El pago de los anteriores valores está sujeto a la prescripción cuatrienal.
  - 6. **Costas y agencias en derecho:** Considerando que el proceso termina con la conciliación las partes acuerdas el desistimiento por este concepto.
  - 7. Los valores correspondientes al presente acuerdo conciliatorio se encuentran señalados en la liquidación que se anexa a la presente certificación.
- (...)>>.

**1.4.2.** De conformidad con la decisión del Comité, la Oficina de Asesora Jurídica de la entidad convocada, realizó la liquidación de los emolumentos dejados de percibir por el convocante, desde el 01 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2004 (más favorable), así (fls.48 a 51):

	VALOR AL 100%	V/R A CONCILIAR 75%
VALOR CAPITAL AL 100%	\$ 4.091.205	\$ 4.091.205
VALOR INDEXADO	\$ 382.150	\$ 286.613
TOTAL A PAGAR	\$ 4.473.355	\$ 4.377.818

**DIFERENCIA CREMIL:** \$ 4.377.818

PARTIDAS COMPUTABLES	%
PRIMA ACTIVIDAD D. 089	22,5%
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	11%
SUBSIDIO FAMILIAR	39%
PRIMA DE NAVIDAD	1/12
PORCENTAJE DE LIQUIDACIÓN	58%

ASIGNACIÓN DE RETIRO ACTUAL	\$ 1.505.247
ASIGNACIÓN DE RETIRO AJUSTADA	\$ 1.585.647
VALOR A REAJUSTAR	\$ 80.400

**1.4.3.** Así mismo, en la audiencia celebrada el 22 de agosto de 2018, la convocada ratificó lo expuesto por el Comité de Conciliación. En acto seguido, la parte convocante acepta la propuesta conciliatoria, por lo que el Ministerio Público en sus consideraciones justificó el acuerdo por la suma de \$4.377. 818 de conformidad con la certificación expedida por el Comité de Conciliación (fls.44 a 46).

**1.5.** Las partes aportaron como pruebas al trámite conciliatorio las siguientes:

- Solicitud de conciliación extrajudicial (fls.1 a 7);
- Copia de la cédula de ciudadanía y carnet de servicios de salud (fl.9);
- Petición 20180052468 del 09 de mayo de 2018 (fl.10);
- Respuesta 2018-53566 del 24 de mayo de 2018 (fls.11 a 12);
- Certificación de Unidad Militar de CREMIL (fl.13);
- Resolución 4581 del 31 de octubre de 1961 (fls.14 a 15);
- Hoja de servicio militares 9335 (fls.16 a 17);
- Acta de conciliación extrajudicial del 25 de julio de 2018, que fija nueva fecha (fl.34);
- Acta de conciliación extrajudicial del 22 de agosto de 2018 (fls.44 a 46);
- Certificación del Comité de Conciliación CREMIL del 21 de agosto de 2018 (fl.48);
- Memorando 211-775 del 22 de agosto de 2018 (fls.48 a 51).

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1. Competencia**

La conciliación extrajudicial es un mecanismo de solución de conflictos de carácter particular y de contenido patrimonial, el cual, conforme a lo establecido en las leyes 23 de 1991 y 640 de 2001, procede también en asuntos que podrían ventilarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

La Ley 640 de 2001, que regula lo correspondiente a la solución alternativa de conflictos, estipuló en su artículo 3º, las clases de conciliación existentes, dividiéndolas en judiciales y extrajudiciales, esta última haciendo referencia a la conciliación prejudicial ya contemplada por la Ley 23 de 1991.

En tal virtud, conforme a la normatividad vigente, la conciliación es una manifestación unívoca de voluntad de las partes, en este caso prejudicial, ante un conflicto originado por actividad administrativa o en ejercicio de aquella, con participación del Procurador Judicial, la que sólo surte efectos jurídicos, con la ejecutoria de la decisión jurisdiccional que la aprueba.

Las pretensiones no superan los 50 SMLMV, por lo que su conocimiento recae en los juzgados (CPACA, art. 152.2.).

### **2.2. Problema Jurídico**

En este caso se debe resolver si se aprueba un acuerdo conciliatorio relativo al reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC más favorable, es decir desde el 01 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2004.

### 2.3. Cuestión previa

#### **Del reajuste de la asignación de retiro con sujeción al índice de precios al consumidor.**

En aras de verificar que el acuerdo sometido a aprobación judicial, se ajusta a la ley, y no es lesivo para el patrimonio público, de conformidad con lo señalado en los artículos 25, 26 y 37 de la Ley 640 de 2001, se estima pertinente hacer una breve alusión al derecho concertado.

Precisado lo anterior, el Despacho procede a explicar la evolución en tres etapas de lo sucedido con el IPC, para la prestación que se concilia:

**Primera etapa.**- Consagró el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 una fórmula para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, cualquiera fuere el régimen de ellas. Sin embargo, la misma ley en su artículo 279 excluyó de los beneficios de dicho estatuto de seguridad social integral al personal de la Fuerza Pública, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la mencionada Ley.

Por su parte el artículo 142 *ejusdem* dispuso el pago de mesada adicional, incluidos <<los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional>>.

**Segunda etapa.**- Posteriormente, el artículo 1º de la Ley 238 de 1995, adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, estableciendo que:

<<Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados>>.

De manera que, con la Ley 238 de 1995 se les reconocen aquellos beneficios y derechos, de indexación –art. 14- y mesada adicional en junio –art. 142-, a los miembros de la Fuerza Pública.

**Tercera etapa.**- Como un auténtico retorno al sistema que anteriormente se ha denominado de la primera etapa, es el que se produce con la expedición del Decreto 4433 de 2004, el cual volvió a consagrar el incremento de las asignaciones de retiro aplicando el principio de oscilación, teniendo en cuenta la variación en las asignaciones de los oficiales y suboficiales en actividad y en adelante prohíbe acogerse a normas que regulen ajustes para la Administración Pública, a menos que así lo regule expresamente la ley.

Profusos han sido los pronunciamientos del Consejo de Estado en torno al tema, como la sentencia proferida con ponencia del consejero William Hernández Gómez, Expediente 73001-23-33-000-2013-00382-01 (3181-14), sentencia de 5 de abril de 2017, en la cual recordó lo expuesto en sentencia del 4 de marzo de 2010, con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero, que al respecto señaló:

*<< El reajuste ordenado respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 sobre la pensión de invalidez, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, está limitado al 31 de diciembre de 2004, toda vez que a partir del 1.º de enero de 2005 se implementó nuevamente la aplicación del principio de oscilación a través de la expedición del Decreto 4433 de 2004; El reajuste ordenado incide directamente en la base de la respectiva prestación pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que a partir del año 2005 se efectuaran sobre dicha prestación. A partir del 1º de enero de 2005 el reajuste de las asignaciones de retiro del personal de la Fuerza Pública, que había cesado en la prestación de sus servicios, debe efectuarse conforme al principio de oscilación previsto en el artículo 42 del Decreto 4422 de 2004, sin embargo, no se debe perder de vista que el reajuste desde el año 1997 al año 2004 debe reflejar el aumento que debió tener la pensión de invalidez a partir del año 2005. En otras palabras, los incrementos que se efectúen sobre la pensión de invalidez de un oficial o suboficial de la Fuerza Pública en retiro a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, esto es el 1 de enero de 2005 deben tener en cuenta el incremento de la variación porcentual del índice de precios al consumidor de los años 1997 a 2004 >>*

En consecuencia, resulta evidente que este reajuste opera desde la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 hasta la expedición del Decreto 4433 de 2004, por cuanto este estatuto prohibió dentro del régimen especial consagrado a favor de la Fuerza Pública, acogerse a normas que regulen ajustes para la Administración Pública, a menos que así lo regule expresamente la ley.

## 2.4. Solución al caso

**2.4.1.** Para resolver, es pertinente indicar que el Consejo de Estado ha dictado unos lineamientos a manera de requisitos necesarios para la aprobación de los acuerdos conciliatorios, que en recientes pronunciamientos este Despacho ha reiterado<sup>1</sup>, los cuales son los siguientes:

- Verificar la caducidad del medio de control, según lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 61 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 81 de la Ley 446 de 1998;
- Que las partes estén debidamente representadas y con la facultad expresa para conciliar;
- La naturaleza económica de las pretensiones, según lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 23 1991, modificado por el artículo 70 de la ley 446 de 1998;
- Que el acuerdo cuente con el soporte probatorio necesario, para acreditar la existencia de la obligación a cargo de la entidad, según los términos del art. 65 A de la Ley 23 de 1991, adicionado por el art. 73 de la ley 446 de 1998<sup>2</sup>;
- El despacho agrega que se debe verificar si el acuerdo es lesivo para el erario<sup>3</sup>.

#### **2.4.2. De la caducidad**

En consideración a que lo pretendido por el demandante es el reajuste de su asignación de retiro con base en el IPC para los años 1999 en adelante, esta prestación ostenta el carácter de periódica y, por tanto, el ejercicio del medio de control que procede en contra del acto administrativo que niega este reconocimiento no está sujeto al término de caducidad, puesto que conforme al numeral 1.º literal c), del artículo 164 del CPACA la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que reconocen o niegan prestaciones periódicas, puede interponerse en cualquier tiempo, independientemente de la prescripción de las mesadas no reclamadas en tiempo, aspecto sobre el cual se referirá el Despacho más adelante.

---

<sup>1</sup> Providencia del 22 de agosto de 2017, Rad. 110013335009201700244-00, Convocante: Unidad Nacional de Protección, Convocada: Ana Ayde Sauca; auto del 18 de septiembre de 2017, Rad. 110013335009201700171-00, convocante: Superintendencia de Industria y Comercio, convocado: Andrés Mauricio Espinosa Otero; auto del 23 de octubre de 2017, Rad. 110013335 009 2017 00189 00, convocante: Superintendencia de Industria y Comercio, convocado: Henry David Torregroza Cervera. Juez: Guillermo Poveda Perdomo.

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 28 de noviembre de 2011, rad. 15001-23-31-000-2011-00128-01.

<sup>3</sup> Artículos 25, 26 37 de la Ley 640 de 2001.

### **2.4.3. Naturaleza económica de las pretensiones**

En el *sub lite*, se advierte que la apoderada de la entidad convocada aportó propuesta de conciliación y el apoderado de la parte convocante manifestó estar de acuerdo con dicha oferta, relacionada con el reajuste de la asignación de retiro en favor del señor González Martínez, con fundamento en el IPC para los años 1999 a 2004 (más favorables).

Al respecto, el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, estipula:

<<Artículo 59.- Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, (...)>>.

Ahora bien, aunque en principio los derechos salariales y prestacionales no son conciliables en razón a su irrenunciabilidad, de acuerdo al artículo 48 de la Constitución Política, la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de los acuerdos conciliatorios, siempre y cuando a través de ellos se procure el mejoramiento del derecho y no su menoscabo.

En ese orden de ideas, resulta forzoso concluir que el acuerdo conciliatorio versa sobre derechos susceptibles de ser conciliados entre las partes, tras verificar que el convenio suscrito lejos de menoscabar el derecho de la parte actora, lo mejora. Adicionalmente, el derecho a la indexación, y el pago de los intereses que emergen como consecuencia del reajuste de la asignación de retiro con fundamento en el incremento del IPC, que es finalmente el aspecto sobre el cual la parte actora está cediendo en su derecho, resulta discutible y renunciable, por tanto, puede ser objeto de transacción, pues el reajuste de la prestación como tal si se reconoce de forma completa.

### **2.4.4. Representación de las partes y capacidad para conciliar**

**2.4.4.1.** En el expediente, se encuentra acreditado que el señor Marcelo Orlando Ramírez Martínez actúa a través de apoderado dentro del presente medio de control y en memorial de poder visto a folio 8, se le facultó para conciliar expresamente.

**2.4.4.2.** Así mismo, se extrae que CREMIL constituyó apoderada (fls.35 a 43) con facultad para conciliar, quién previa anuencia del Comité de Conciliación propuso una fórmula de arreglo, que fue aceptada de forma libre y espontánea, por la parte convocante.

---



En ese sentido, es evidente la voluntad de las partes de acogerse a la propuesta plasmada en la certificación expedida por el Comité de Conciliación de la entidad convocada.

**2.4.5. Respaldo probatorio del acuerdo**

Reposa en el expediente copia de la Resolución 4581 del 31 de octubre de 1961, por medio de la cual se reconoció asignación de retiro en favor del Sargento Segundo del Ejército el señor Marcelo González Martínez, efectiva a partir del 16 de octubre de 1961 (fls.14 a 15).

De la misma manera se acreditó la presentación del escrito de petición radicado el 09 de mayo de 2018, por medio del cual el convocante solicitó a la entidad demandada el reajuste de su prestación de conformidad con el IPC certificado por el DANE (fl.10), que siendo documento privado es de fecha cierta (art. 253 del CGP) y no fue cuestionado por la entidad que lo resolvió negativamente con oficio 0053564 consecutivo 2018-53566 del 24 de mayo de 2018.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el IPC es un hecho notorio, el Despacho presenta un cuadro comparativo donde se evidencia la diferencia del incremento de la asignación de retiro realmente efectuado conforme al principio de oscilación, y el reclamado por el convocante, en aplicación del IPC, certificado por el DANE para el grado de Sargento Segundo, así:

DIFERENCIA ENTRE SALARIOS FIJADOS POR OSCILACION E IPC			
AÑOS	VARIACION	IPC año ant	DIFERENCIA
1999	14,91%	16,70%	-1,79%
2000	9,23%	9,23%	0,00%
2001	8,00%	8,75%	-0,75%
2002	6,00%	7,65%	-1,65%
2003	6,47%	6,99%	-0,52%
2004	5,50%	6,49%	-0,99%

Lo anterior permite concluir que el incremento de la asignación de retiro en favor del convocante, realizado con base en el principio de oscilación para los años 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, fue inferior al IPC, siendo procedente reajuste respecto de los mentados años, y su correspondiente incidencia en las anualidades posteriores.

Entonces, es evidente que el reajuste realmente procede a partir del 1 de enero de 1999. Ahora bien, la entidad demandada en la propuesta conciliatoria señala que reajusta la asignación de retiro desde el 1 de enero de 1999, como en efecto corresponde.

Entonces, bajo estos parámetros la entidad propone el pago del 100% del capital por la suma de cuatro millones noventa y un mil doscientos cinco pesos m/cte (\$4.091.205) y el 75% de la indexación por valor de doscientos ochenta y seis mil seiscientos trece pesos m/cte (\$286.613), para un total de cuatro millones trescientos setenta y siete mil ochocientos dieciocho pesos m/cte (\$4.377.818).

Este reajuste implica que la mesada pensional del demandante tenga un incremento de ochenta mil cuatrocientos pesos m/cte (\$80.400).

#### **2.4.6. Sobre la prescripción del derecho**

Para efectos de verificar que el acuerdo conciliatorio objeto de estudio no resulta lesivo al patrimonio público, es menester examinar que la entidad no haya concertado el pago de obligaciones extinguidas por la prescripción cuatrienal prevista en el artículo 155 del Decreto 1212 de 1990, para las mesadas porque el derecho al reajuste es imprescriptible, es prestación periódica.

El convocante elevó petición de reajuste ante la entidad demandada el 09 de mayo de 2018, deprecando el reajuste de su prestación, razón por la cual, la entidad no se encuentra obligada al pago de las diferencias que resulten como consecuencia del reajuste, sobre de las mesadas anteriores al 9 de mayo de 2014, habida consideración a que frente a ellas operó el fenómeno de la prescripción cuatrienal, tal y como lo señaló la misma entidad en la liquidación que soporta la propuesta conciliatoria debidamente aceptada por el apoderado actor (fls.50 vto y 51).

#### **2.4.7. Conclusión**

De las consideraciones expuestas, se concluye que el acuerdo conciliatorio analizado, se fundó en un objeto y causa lícita, sin vicios en el consentimiento de las partes conciliatorias, y sin que con él se desconozcan los derechos irrenunciables del empleado, se lesionen los intereses del Estado, o afecte el patrimonio económico de la entidad.

---

En consecuencia, el Despacho APROBARÁ la propuesta de conciliación entre el apoderado del señor Marcelo Orlando González Martínez con facultad expresa para conciliar y la apoderada de CREMIL.

Bajo las anteriores consideraciones, el **Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,**

**RESUELVE**

**PRIMERO: OBEDECER Y CÚMPLIR** lo dispuesto por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo dispuesto en la providencia del 09 de noviembre de 2018, y en su lugar **AVOCAR** el conocimiento de la presente asunto.

**SEGUNDO: APROBAR** el acuerdo conciliatorio contenido en el acta del 22 de agosto de 2018 (fls.44 a 46), consistente en los valores que se indican a continuación:

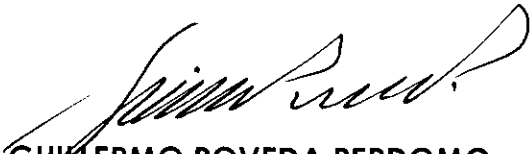
<b>VALOR CAPITAL AL 100%</b>	<b>\$ 4.091.205</b>
<b>VALOR INDEXADO</b>	<b>\$ 286.613</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 4.377.818</b>

**TERCERO:** Esta providencia presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada material.

**CUARTO:** Por Secretaría, **EXPÍDASE** a las partes copia del acta de conciliación y de la presente providencia, conforme a lo previsto en el artículo 114 del Código General del Proceso.

**QUINTO:** En firme este auto, por Secretaría, **ARCHÍVESE** el expediente dejando las constancias a que haya lugar.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
**GUILERMO POVEDA PERDOMO**  
Juez

**Radicado:** 110013335 009 **2018 00559 00**

**Convocante:** Marcelo Orlando González Martínez

**Convocado:** Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)

---

**JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE  
BOGOTÁ D.C., SECCIÓN SEGUNDA**

**NOTIFICACION POR ESTADO**

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **cinco (05) de febrero de dos mil diecinueve (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.

**Miryam Yanneth Martínez Cortés**  
Secretaria